

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 223

FECHA: 7 de Septiembre de 2015

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
BOLIVIA	SOBRE EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN BOLIVIA Y SU FINANCIAMIENTO	2
CENTROAMÉRICA	COMUNICADO CLOC- VÍA CAMPESINA CENTROAMÉRICA	4
COLOMBIA	CAPITÁN DEL EJÉRCITO AFIRMA QUE URIBE DICTABA ÓRDENES PARA ASESINAR JUNTO A LAS AUC	5
EL SALVADOR	ESTADOS UNIDOS EXPORTA CRIMINALES, NO DEMOCRACIA	6
GUATEMALA	EL PUEBLO DERROTÓ AL GENERAL	7
HAITÍ	NEOCOLONIALISMO Y OTRA TRÁGICA FARSA ELECTORAL	11
HONDURAS	CORTE IDH VISITA A LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE TRIUNFO DE LA CRUZ	14
MÉXICO	GUERRA SUCIA CONTRA LOS PUEBLOS DEL MAÍZ	15
NICARAGUA	PRIMER LOGRO DE “GUARDIANES DE YAOSKA” CONTRA LA MINERÍA EN RANCHO GRANDE	16
PANAMÁ	¡CUIDADO CON LA DESCENTRALIZACIÓN!	17
PUERTO RICO	LA ISLA DEL (DES)ENCANTO	19
VENEZUELA	VENEZUELA EL VERDADERO PROBLEMA	20

BOLIVIA

SOBRE EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN BOLIVIA Y SU FINANCIAMIENTO

Estimados compañeros y compañeras:

Agradezco la generosidad que han tenido por dedicar parte de su tiempo a elaborar una carta dirigida a mi persona, con el fin de proponerme un "[llamado a la reflexión](#)" respecto a mis declaraciones sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia y su financiamiento.

Entiendo que se preocupan respecto a la libertad de expresión, pero considero que lo hacen en vano. Valga sin embargo la oportunidad, porque siempre es grato saber que los amigos se acuerdan de uno. Y digo que su preocupación es vana, porque en mis declaraciones sobre las cuatro ONG (Milenio, CEDIB, Fundación Tierra y CEDLA), ni ahora ni en ninguna oportunidad anterior, he planteado su cierre, expulsión o restricción alguna de su actividad. Bien saben ustedes que en Bolivia la libertad de expresión y asociación no solo constituyen derechos civiles, sino que representan componentes indisolubles de la vida, la historia y desarrollo de las sociedades democráticas, de las organizaciones y los movimientos sociales. La democracia misma solo se comprende e irradia sobre la base innegociable de la libertad de asociación y pensamiento.

Hoy, la democracia en Bolivia está alcanzando niveles de profundidad e irradiación extraordinaria, precisamente en el marco de la administración del Estado por parte de organizaciones sociales indígenas, campesinas, obreras, vecinales y populares, cuya vida se alimenta de la libertad de ideas y múltiples formas organizativas. Venimos de esa raíz. Y para quienes en tiempos neoliberales hemos soportado la represión y la cárcel por pensar diferente, está más que claro que el horizonte socialista y plurinacional solo puede construirse con base en la ampliación de los principios democráticos de libertad de pensamiento y asociación.

En este contexto –y haciendo uso de la libertad de pensamiento y expresión – , he señalado que cuatro ONG mienten y camuflan su activismo político reaccionario bajo el manto de actividad "no gubernamental". ¿Es que acaso no tienen derecho a mentir? Por supuesto que sí, pero yo también tengo derecho a denunciarlo, a denotar las falsedades escritas en sus "supuestas" investigaciones, que más se asemejan a decálogos de fe política o primitivos perfiles de estudio. En la misma medida en que los funcionarios de estas ONG tienen el derecho constitucional de hacer para-política partidaria desde esas organizaciones, yo tengo el derecho a develar que están jugando el papel de sustitutos de los partidos políticos de derecha, y que sus funcionarios no hacen más que reclutar adeptos mediante el ropaje de actividades hipócritas "no lucrativas", ante su reiterado fracaso en la proclama política abierta.

Estas cuatro ONG bolivianas tienen todo el derecho a existir, funcionar, investigar e incluso a hacer política; sin embargo, nosotros tenemos el derecho y la necesidad – así lo exige el movimiento popular que conduce el proceso revolucionario en Bolivia – de criticar su sorprendente encuadre ideológico en el discurso medioambientalista emitido y financiado desde los centros imperiales.

Todos coincidimos en que es necesario un orden socio-productivo que sustituya la lógica depredadora de la naturaleza impulsada por el valor de cambio. Pero acá existen al menos dos posiciones. La primera, correspondiente al discurso imperial, propugna que la plusvalía medioambiental que sostiene el desarrollo de los países del norte, sea pagada por los países del sur, congelando así la mejora de sus condiciones de vida y petrificando las relaciones coloniales de pobreza y sometimiento construidas a lo largo de siglos y aún vigentes hoy. Esta posición está claramente expresada en la propuesta medioambientalista de USAID respecto a la Amazonia [1], y en la sugerencia del gabinete de Tony Blair para la implementación de una administración transnacional en esa región. En contraste a esta posición, para las naciones indígenas *soberanas*, una nueva sociedad medioambiental solo será posible rompiendo la condición colonial de fragmentación y pobreza prevaleciente en los pueblos y naciones del sur. De lo que se trata es de crear una civilización ecológica mediante la combinación de saberes ancestrales y contemporáneos capaces de restituir un metabolismo procreativo entre naturaleza y naturaleza devenida en sociedad.

Sin embargo, esto no se puede alcanzar simplemente imitando lo que sucede en el norte (ilusión desarrollista), ni mucho menos congelando las condiciones de vida de los pueblos del sur (colonialismo petrificado). Esta civilización solo puede surgir si somos capaces de proporcionar las condiciones materiales mínimas de existencia, de satisfacción de las necesidades básicas, que permitan liberar las capacidades creativas y cognitivas de los pueblos para la creación de los fundamentos de una sociedad ecológica, que no podrá ser más que de carácter comunitario y universal.

En ese sentido, a quienes sí he prevenido y advertido con la expulsión, es a organismos internacionales, ONG y gobiernos extranjeros que financian y se involucran en actividades políticas, que van en contra de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia y el proceso revolucionario del pueblo que se viene desarrollando durante los últimos diez años. Se trata de un principio de soberanía y dignidad elemental para cualquier Estado democrático y, mi persona, en tanto eventual servidor público, no solo está en el derecho sino en la obligación moral e intelectual de oponerse a cualquier tipo de injerencia en actividades políticas internas.

El núcleo del neoliberalismo contemporáneo, que ha destruido derechos, recursos y asociatividad social en el mundo entero, no es la sustitución de la soberanía nacional por un tipo de mundialización desterritorializada del poder. Basta ver las murallas de cemento y acero que los supuestos Estados desarrollados levantan día a día ante el flujo de fuerza de trabajo, para comprender que la soberanía nacional de todos los países intenta ser reemplazada por la soberanía nacional de unos pocos, que pretenden decidir sobre el destino de otros.

El restablecimiento de los principios de soberanía nacional, es decir, la autodeterminación, es uno de los pilares para el desmontaje del orden neoliberal en Bolivia. Nos referimos a la autodeterminación como Estado para definir la gestión de sus recursos y su modo de relacionamiento con otros Estados, y también a la autodeterminación social para definir su horizonte como comunidad política en la historia.

Esa es la razón principal por la que decidimos – como gobierno soberano – expulsar al FMI de las oficinas privadas que tenía en el Banco Central de Bolivia (BCB); a la CIA, que tenía oficinas en el Palacio de Gobierno; al cuerpo militar norteamericano, que tenía su base extraterritorial en un aeropuerto en la Amazonía boliviana; a USAID y al embajador de los Estados Unidos, que conspiraba junto a grupos separatistas de extrema derecha, apoyando la división del país en micro-republiquetas bajo tuición extranjera.

La autodeterminación nacional es una dimensión de la autodeterminación social, y ninguna revolución podrá avanzar en la profundización de los derechos democráticos de la sociedad sin la consolidación de las condiciones de la soberanía estatal. Es imposible definir el horizonte interior de una sociedad (el posneoliberalismo, el Vivir Bien, el socialismo, etc.), sin definir su horizonte externo, sin ser soberano. Por ello, no podemos permitir que ningún gobierno foráneo, empresa u organización para gubernamental extranjera definan las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. De lo contrario, nos estaríamos sometiendo a un neocolonialismo.

Todo este marco me permite regresar a mis comentarios sobre las cuatro ONG citadas, acerca de las que sostuve que mentían y defendían los intereses de la derecha política internacional. La preocupación suya es comprensible, pues les mintieron. Ustedes se alarmaron porque ellas les dijeron que yo había propuesto expulsarlas. ¡Nada más falso! A quienes sí advertí con la expulsión del país, es a organismos extranjeros que se entrometan en actividades políticas, que mellen la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. Con esto queda plenamente demostrado que esas ONG mienten, y lo hacen de tal manera, que consiguen que personas bienintencionadas se sumen al discurso imperial orientado a infundir sospechas sobre la vigencia de las libertades democráticas y los derechos civiles de los regímenes revolucionarios y progresistas de América Latina. Asimismo, mencioné que dichas ONG hacían política partidaria de derecha, apoyando el discurso medioambientalista imperial. Una revisión somera de sus argumentos, comparados con los expuestos por USAID respecto a la Amazonía, comprueba aquello de inmediato.

Por tanto, ustedes comprenderán que así como respetamos la opinión política de todos los actores nacionales en Bolivia, en mi calidad de ciudadano –y más aún como servidor público – no tengo por

qué callar ni ocultar las mentiras de estas o de cualquier otra institución que dañe el proceso revolucionario perteneciente a las organizaciones sociales del país. La defensa innegociable de la revolución boliviana, interna y externamente, es para mí algo irrenunciable, como el mismo derecho a la libertad de expresión y asociación.

Lamento profundamente que hayan sido utilizados por estas cuatro ONG en su intento de simular una imagen autoritaria de – bien lo saben ustedes – uno de los países más democráticos del mundo. No obstante, si lo que está detrás de esta mala pasada es su buena voluntad para debatir horizontes revolucionarios o progresistas para nuestro país y el mundo, bienvenidos como siempre.

Un saludo afectuoso,

Ciudadano Álvaro García Linera

Fuente: Álvaro García Linera. Rebelión

CENTROAMÉRICA

COMUNICADO CLOC- VÍA CAMPESINA CENTROAMÉRICA

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC - Vía Campesina Centroamericana reunida en Managua – Nicaragua los días 26, 27 y 28 de agosto del presente año, ante la opinión pública regional e internacional, manifiesta lo siguiente:

1- Que nuestros países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) sufren severas consecuencias de la crisis climática que se refleja en la falta de lluvias y que afecta a los pequeños y medianos productores en toda la región.

2- La falta de voluntad política de algunos gobiernos para impulsar políticas públicas a favor de la soberanía alimentaria, en defensa de los recursos naturales y en contra de los Tratados de Libre Comercio (TLC) han agravado la crisis alimentaria y climática en nuestra región centroamericana.

3- En Centroamérica más de veinte millones de personas están siendo afectadas por el hambre y la pobreza; pueblos originarios, campesinos y campesinas, mujeres rurales jóvenes y más de dos millones de niños y niñas son los que más sufren las consecuencias.

4- La región Centroamericana está siendo azotada por sequías, escasez de granos básicos, acaparamiento del agua y de la tierra, destrucción de nuestros bosques, y el recalentamiento de nuestra Madre Tierra producto del sistema capitalista de producción neoliberal.

5- La Región Centroamericana a excepción de Nicaragua, atraviesa un alarmante déficit alimentario que se refleja en los altos niveles de importación de productos agrícolas y que se calcula en un 70% de arroz, el 60% del maíz y hasta el 50% del frijol, así como verduras, lácteos, carnes y otros productos, la crisis se debe a la falta de voluntad política de algunos gobiernos para dar respuesta a la demanda de los pueblos originarios, campesinos y campesinas, pequeños y medianos agricultores, a los efectos del cambio climático y los tratados de libre comercio (TLC).

6- Otro factor dramático que viven nuestros países como Honduras, Guatemala y Panamá es la violencia social, la corrupción, la impunidad y la falta de una verdadera democracia incluyente y participativa de nuestros pueblos; en el caso de El Salvador la ola de violencia que atraviesa el país, producto de la conspiración sistemática de un modelo neoliberal capitalista que atenta contra la democracia y el desarrollo económico social del país.

En base a planteado demandamos:

- La renuncia inmediata del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, la reforma a la Ley electoral y de partidos políticos y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente y llamamos a la población a no votar este 6 de septiembre porque en estas condiciones no queremos elecciones.

- Apoyo total y solidario al pueblo indignado de Honduras para que llegue la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), para la realización de un verdadero dialogo incluyente y democrático que conduzca al país a una asamblea nacional constituyente.

- Apoyamos a los pequeños y medianos productores y productoras agrícolas costarricenses en su lucha contra La Alianza del Pacífico que no es más que un nuevo tratado de libre comercio que amenaza la producción agrícola y pecuaria de Costa Rica.
 - Exigimos a los gobiernos cambiar las políticas neoliberales por un sistema que garantice el acceso a la tierra, el agua, las semillas, los recursos naturales y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.
 - Elaborar un plan de emergencia contra el hambre, la pobreza y el cambio climático en la región centroamericana con plena participación de pueblos originarios, campesinos y campesinas, mujeres y jóvenes.
 - Despenalización de la lucha agraria y la defensa de la madre tierra, dejando en libertad inmediata a los presos políticos (hombres y mujeres) en Guatemala y Honduras que luchan por la reforma agraria integral, democracia participativa y poder popular.
- “Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”

Fuente: Vía Campesina Centroamérica

COLOMBIA

CAPITÁN DEL EJÉRCITO AFIRMA QUE URIBE DICTABA ÓRDENES PARA ASESINAR JUNTO A LAS AUC

El capitán del Ejército Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’, fue hasta 2004 el jefe de inteligencia del GAULA en el departamento del Magdalena (grupo élite del Ejército Nacional contra la extorsión y el secuestro) y al mismo tiempo, desde 1998, tuvo la doble función de lugarteniente principal del paramilitar “Jorge 40”. Es decir, siendo militar activo era también miembro de los ejércitos paramilitares. Guevara no era un infiltrado, sino que trabajaba abiertamente para los dos grupos armados, el legal y el ilegal, lo cual sabían y protegían altos mandos, como el general Mario Montoya, quien llegó a ser Comandante del Ejército de Colombia. Coordinaba en el norte del país la colaboración criminal que se dio entre el bando armado estatal y el ilícito paramilitar, principalmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de quien dice recibió órdenes para cometer asesinatos. Afirma que la sugerencia de hacer parte de los paramilitares fue de un superior suyo: “fue mi mayor, que en paz descance, Salazar Arana, fue comandante del GAULA del Atlántico en ese momento”, dijo ‘101’. En su extenso relato, recogido en el video que acompaña esta nota, Guevara Cantillo sostiene que el régimen de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” fue una despiadada “política de Estado” de la que él hizo parte, y la describe en forma descarnada y pormenorizada, documentos en mano.

Revela que, por intermedio del general Mario Montoya, recibió del entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez órdenes de cometer asesinatos y describe una íntima, impune y eficiente relación criminal entre las fuerzas armadas del Estado y los ejércitos del crimen organizado de extrema derecha.

La entrevista a Guevara Cantillo fue hecha en septiembre pasado en la cárcel Nacional Modelo, de Barranquilla, y solamente es revelada ahora, tras múltiples comprobaciones y consultas con fuentes militares, judiciales, diplomáticas, civiles y criminales, hechas por los autores de esta nota.

Las ejecuciones extrajudiciales que ahora confiesa este paramilitar en un relato franco y espeluznante, todavía hoy hacen parte de las estadísticas de los “triumfos” en la guerra contra las FARC que el expresidente Uribe sigue reclamando en su campaña electoral actual, con la que intenta llegar al Senado al frente de una organización política de extrema derecha, de la que es ideólogo principal el primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, José Obdulio Gaviria.

El excapitán Guevara (‘101’) también acusa de complicidad en los falsos positivos al coronel Édgar Iván Quiñones Cárdenas, actual subcomandante de la Novena Brigada del Ejército, que fue mayor y superior directo de alias ‘101’. Según Guevara (“101”), el coronel Quiñones coordinaba los objetivos de ejecuciones extrajudiciales con información de sus cómplices paramilitares, firmaba las

legalizaciones falsas de quienes hacía pasar por muertos caídos en combate, y obtenía el armamento que el capitán Guevara ('101') ponía junto a sus cadáveres después de asesinarlos.

En pocas palabras, lo que el excapitán Guevara ('101') revela en su testimonio es que el general Mario Montoya y a veces el Presidente Uribe Vélez pedían los falsos positivos, el entonces mayor Quiñones (hoy coronel) se encargaba de la logística y su legalización, y el capitán Guevara ('101') los asesinaba.

El general Mario Montoya, al que se refiere Guevara Cantillo de manera extensa, tiene innumerables señalamientos por crímenes de guerra y otras atrocidades que le son endilgadas a lo largo de su controvertida carrera militar.

Guevara Cantillo comandó las fuerzas de "Jorge 40" en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, en estrecha coordinación con el Ejército y la Policía de Colombia. Se retiró de manera voluntaria, sin la menor tacha en su hoja de vida, a pesar de la multitud de crímenes de lesa humanidad que cometió con el beneplácito y la mayor parte de las veces a petición de quienes fueron sus jefes militares.

El jefe paramilitar de Guevara Cantillo, "Jorge 40", actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, donde purga una pena por narcotráfico y se encuentra próximo a regresar a Colombia. Al llegar será puesto a disposición de la justicia nacional, que lo reclama. Deberá confesar la totalidad de sus crímenes para permanecer dentro de Justicia y Paz y conseguir que en ningún caso se le condene a más de 8 años de cárcel por la totalidad de los cientos de miles de homicidios que ha cometido, así como otros delitos de lesa humanidad.

Guevara Cantillo es sobrino del exgeneral de Ejército Antonio José Ladrón de Guevara.

En su testimonio, '101' habla, entre otros temas, sobre:

– El general Mario Montoya. "Esas eran las políticas de Mario Montoya: 'denlos de baja, denlos de baja, a mí no me traigan capturados. Y si no había bajas (sic), miren a ver cómo hacen'. Esas eran las palabras de él".

– Los falsos positivos. A la pregunta de si hubo órdenes de cometer homicidios del general Montoya cumplidas por él, '101' responde: "Sí, claro, todos los falsos positivos".

– La complicidad del ejército y los paramilitares. "Mi comando "(Jorge) 40" me mandaba las tropas de él de autodefensas, y yo las pasaba como tropas de Ejército. Iba al combate con la guerrilla dirigiendo unidades de autodefensa. (...) Todo el mundo lo sabía. En ese momento yo era teniente y un teniente no es una rueda suelta".

– Órdenes de asesinato dadas por Álvaro Uribe Vélez. "(Alias) Tijera mata al alcalde de la Zona Bananera, un señor Avendaño. A partir de ese momento, [el Presidente Álvaro] Uribe da la orden de que hay que matar a Tijera, de que tienen que matar a Tijera. La orden se la da a [general Mario] Montoya, Montoya se la da a [Édgar Iván] Quiñónez: tienen que matar a Tijera. Montoya estaba desesperado con eso".

Por El inciso.com-Las dos Orillas / Resumen Latinoamericano/ 30 de Agosto 2015

EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS EXPORTA CRIMINALES, NO DEMOCRACIA

En el *Clarín* de este Domingo hay una pequeña nota de Gustavo Sierra con el título de "Las maras desangran El Salvador". (23 Agosto 2015, p. 32) En ella se habla de la ola de violencia que sacude a ese país centroamericano: según el autor en tres días "murieron 125 personas en los enfrentamientos entre los pandilleros y con la policía o el ejército." La nota abunda en otros detalles: la fenomenal tasa de homicidios en El Salvador actual: 90 por cada 100.000 habitantes. A efectos comparativos digamos que según las cifras producidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el año 2012, la tasa para Estados Unidos era de 4.8; 5.5 para Argentina; Brasil 21.8 y Honduras 66.5. En ese mismo año, la tasa para El Salvador era de 41.2, siempre sobre

100.000 habitantes. Es decir que una tasa ya de por sí muy elevada más que se duplicó en menos de tres años y, especialmente, en los últimos meses.

Obviamente que hay muchos factores que explican este desgraciado resultado y no es este el momento de examinarlos aquí. De hecho, en la nota de Sierra se mencionan algunos de ellos pero se omite el que, en la violenta irrupción de estos días, es sin duda el más importante: la decisión del gobierno de Estados Unidos de liberar a cientos, probablemente miles, de “mareros” que estaban recluidos en diversas cárceles de ese país y enviarlos directamente a El Salvador. Esto ya de por sí no es precisamente un gesto amistoso para con el país al cual se le remite tan nefasto contingente, pero es mucho más grave si previamente se “limpia” el prontuario de esos delincuentes de forma tal de imposibilitar que se pueda impedir legalmente su ingreso a El Salvador. Con sus antecedentes delictivos convenientemente purgados nada puede detenerlos, y los malhechores se convierten en gentes que regresan a su país de origen sin tener ninguna cuenta pendiente con la justicia. Una canallada, ni más ni menos.

¿Cómo interpretar esta criminal decisión? Va de suyo que esto no pudo haber sido una súbita ocurrencia de las autoridades carcelarias norteamericanas que un día decidieron soltar a casi todos los “mareros”. Una política de tamaña trascendencia se adopta en otro nivel: el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad o la propia Casa Blanca. El objetivo: generar una ola de violencia para sembrar el caos y provocar el malestar social que desestabilice al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional, en línea con la prioridad estadounidense de “ordenar” lo antes posible el díscolo patio trasero latinoamericano sacándose de encima a gobiernos indeseables. Por eso un gesto tan inmoral y delincencial como ese, que se ha cobrado tantas vidas en El Salvador y que seguramente se cobrará muchas más en los próximos días. Indiferente ante las consecuencias de sus actos, Washington prosigue impertérrito dando lecciones de derechos humanos y democracia al resto del mundo mientras aplica, sin pausa, las tácticas del “golpe blando” en contra de quienes tengan la osadía de pretender gobernar con patriotismo y en beneficio de las grandes mayorías populares. El autoproclamado “destino manifiesto” de Estados Unidos es exportar la democracia y los derechos humanos a los cuatro rincones del planeta. Lo que hace, en realidad, es exportar criminales.

Fuente: Atilio A. Borón. Rebelión

GUATEMALA

EL PUEBLO DERROTÓ AL GENERAL.

El hartazgo, la indignación y la firmeza del pueblo guatemalteco terminaron con el gobierno del General Otto Pérez Molina, cuando faltaban 4 meses para el fin de su mandato. Las numerosas pruebas presentadas por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) implican al presidente en una trama delictiva de contrabando y cobros ilegales en las aduanas del país. Reiteradas movilizaciones populares de miles de personas denunciando la corrupción y pidiendo justicia, alcanzaron finalmente su objetivo.

“Más dura será la caída”

En 48 horas, el General perdió su inmunidad en el Congreso y la fiscalía ordenó su detención. En el mismo breve periodo, el pueblo guatemalteco lo vió y escuchó por TV proclamar su inocencia y afirmar que luchaba contra el delito y la corrupción en su país y horas más tarde, ya detenido, comparecer compungido ante el juez escuchando las grabaciones donde él mismo daba indicaciones a miembros de la trama criminal. La fiscalía dispone de miles de escuchas que comprometen a Pérez Molina y a unos 50 funcionarios de distinto nivel.

La hidra de dos cabezas

La banda que dirígía la corrupción, era conocida como “La Línea”, y entre sus miembros aparecen importantes funcionarios de la administración tributaria, del

Instituto de la Seguridad Social , de las Aduanas, incluso el secretario privado de la vicepresidencia. Pero en documentos y escuchas, la referencia a los “jefes” de la banda, mencionaban a “el uno” y “la dos”.

La “hidra de dos cabezas” que dirigía “ La Línea ” residía ...en el Palacio Nacional. Decodificar las claves numéricas no resultó difícil para los investigadores: “el uno”, resultó ser el General Otto Pérez Molina, y “la dos”, la vicepresidenta Roxana Baldetti. Esta “pieza” del puzzle fue la primera en caer. El juez Miguel Angel Gálvez ordenó su detención el 20 de agosto, imputándole en principio estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Ninguno de los tres delitos es excarcelable, por lo cual ingresó en prisión. Según trascendió, EEUU podría pedir su extradición porque allí adquirió propiedades en operaciones que podrían considerarse “lavado de dinero”. Pero esto seguramente es “la punta del iceberg”. Los investigadores estiman que hay mucho más por esclarecer.

El N° 1 (en represión y corrupción)

“El Uno”, era el presidente Pérez Molina, un general que en la campaña electoral de hace cuatro años proclamó que venía a poner orden y “barrer la corrupción”. Un general con una comprometida trayectoria en los genocidios cometidos por las Fuerzas Armadas de su país contra su propio pueblo.

Organismos de Derechos Humanos acusaron al general de estar directamente implicado en el uso sistemático de la tortura durante la década de los 80, en la que desempeñó mando en operaciones represoras en el departamento del Quiché donde fueron asesinados miles de indígenas y campesinos. Más tarde ocupó la jefatura de la Inteligencia Militar.

Otto Pérez Molina, un general que en la campaña electoral de hace cuatro años envió desde su Twitter @ottopm mensajes como *“la corrupción es uno de los problemas más graves de nuestro país. Trabajemos juntos por el Cambio.”* Otro ejemplo: *“Los guatemaltecos debemos exigirle al gobierno transparencia; es increíble la cantidad de escándalos de corrupción que salen a la luz”.*

Cuando se retiró del ejército en el 2001, fundó el Partido Patriota (“PP”), con el apoyo de grandes empresarios y ex militares. Y tras algún intento fallido, terminó accediendo al poder al ganar las elecciones del 2011. Al parecer, allí retomó (¿o reforzó?) la trama corrupta que según testimonios, se puso en marcha hace más de 20 años.

“Pérez Molina siempre ha sido el jefe de la banda de contrabandistas”

Esta frase pertenece al ex presidente de Guatemala Jorge Serrano Elías, quien desde su exilio en Panamá y en una entrevista publicada en la revista El Faro, afirma que durante su gobierno, a comienzos de los años 90 “el general Otto Pérez Molina se valió de su posición como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar para dirigir una estructura criminal dedicada al contrabando y el fraude aduanero. Desde entonces, asegura, el actual presidente inició la cooptación del Estado para fines mafiosos.” Destaca también que después de su caída la misma trama quitó el control del estado sobre la banca, para abrir las puertas al lavado de dinero. Y añade: “Hoy vemos que Guatemala se ha vuelto una lavandería del dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Esa estructura la montó Pérez Molina en 1993.”

La periodista Carmen Quintela en un artículo en el diario español “El Mundo” afirmaba hace pocos días que en realidad la red de corrupción aduanera en las fronteras de Guatemala surgió hace muchos años. (N.de R. : en la época en la que los militares controlaban fronteras para evitar el ingreso de armas para la guerrilla). Y añade que “en el Ejército surgieron dos hermandades bautizadas como “ La Cofradía ” y “El Sindicato”. Y concluye afirmando que “según un cable desclasificado de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de Estados Unidos, Pérez Molina era considerado el líder de El Sindicato”.

El fundador y presidente de El Periódico de Guatemala, José Rubén Zamora explica la evolución de la estructura criminal adueñada del “negocio” de las aduanas a modo de “poder paralelo” con fuertes vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilícitas: La Cofradía , Grupo Salvavidas, la Red Moreno ...y La Línea. Y añade: “Nunca vi esta voracidad, son unas aves de rapiña voraces”. El medio que dirige ha recibido demandas, ataques y boicot económico de parte del gobierno del general Pérez Molina.

¿Todo cambia o todo sigue?

Gran parte del pueblo guatemalteco celebró que tras muchas semanas de protesta en plazas y calles, finalmente la vice-presidenta Baldetti y el general Pérez Molina fueran cesados y detenidos para ser procesados. Pero la historia contemporánea nos recuerda que Guatemala estuvo y está en manos de un grupo de familias que constituyen el poder económico, y que desde hace mucho tiempo tiene sus raíces bien plantadas en las estructuras dirigentes o “decisivas”: las fuerzas armadas, la jerarquía eclesial, las cámaras empresariales y el Poder Judicial. Es por eso que a pesar de las cíclicas rebeldías populares, toda pretensión de cambio suele quedar en promesas solemnes incumplidas. Así viene ocurriendo sistemáticamente con cada expectativa electoral. Como escribía la revista guatemalteca C4 : “Los actores cambian, los nombres de las “familias” poderosas, a veces suenan más a veces menos, todo depende de su nivel de influencia en el gobierno de turno. Sin embargo, siguen dominando la vida política del país. Los nuevos ricos, pretenden comprar su entrada a la sociedad por medio de lujos y extravagancias. Poco a poco ganan terreno social y son cada día más visibles, aún así, el pisto viejo se guarda y reclama su poder.” Y cierran con una frase muy expresiva: “En Guatemala el pisto manda. Las ideologías no existen. La corrupción no termina, solo evoluciona y tristemente la historia se repite.” Y así parece que ocurrirá una vez más.

El “recambio” provisional

El presidente interno que asumió el gobierno de Guatemala, es Alejandro Maldonado, un representante de la oligarquía del país, que desempeñó cargos y ministerios en los últimos decenios en diversos gobiernos. Ahora, reemplazó primero a la vice Roxana Baldetti presidenta, y cuando quitaron al general, tuvo un nuevo “ascenso”, esta vez a presidente de Guatemala hasta la finalización del mandato del general detenido, o sea en enero próximo. La embajada norteamericana que hasta último momento intentó validar y sostener a Pérez Molina, le abandonó cuando ya la presión popular y las pruebas de la corrupción eran abrumadoras. Por eso la ceremonia de toma de posesión en el Congreso contó con la presencia del embajador Todd Robinson, clara señal de “luz verde” al recambio presidencial, a lo que añadió su deseo (o el del gobierno norteamericano) de que el proceso eleccionario inminente “siguiera adelante”. Y así será.

¿ Y a quién elegir que sea honesto y gobierne con y para el pueblo ?

Poco más de 7 millones de guatemaltecos han sido convocados para votar mañana domingo, tras una de las campañas más atípicas y surrealistas que ha vivido el país. En medio de la detención y comienzo del proceso a quien hasta hace 48 horas era el presidente y los indicios de una corrupción que carcome parte del aparato del estado y las instituciones, deben elegir presidente, vice, 158 diputados nacionales, 20 al Parlamento Centroamericano y más de 300 corporaciones municipales para el período 2016-2020.

Las “ofertas” están muy por debajo de la demanda popular. Candidatos no faltan, pero casi todos responden a viejas y desgastadas propuestas incumplidas. Los medios de comunicación como ocurre en muchos países de América Latina, han potenciado a tres de ellos.

Libertad Democrática Renovada (nombre que permite formar las siglas “LIDER” presenta a Manuel Baldizón que se define como “humanista y pacifista”, pero que su anterior campaña del 2011 incluyó la propuesta de la aplicación de la pena de muerte. Su candidato a vice es Edgar Barquín, que tiene acusaciones de lavado de dinero. En realidad, su discurso es oportunista y su único objetivo claro es alcanzar el poder.

El Frente de Convergencia Nacional, que nació como propuesta de un grupo de exmilitares que reivindican su papel durante el Genocidio de los años 70 y 80, lleva como candidato a Jimmy Morales, en el intento de aprovechar su popularidad como comediante de televisión. Su lema: “Ni corrupto, ni ladrón”. Recordando las frases de Pérez Molina en la campaña del 2011 como aquella de “los gobernantes deben dar el ejemplo y no hacer cosas ilegales”, la promesa no resulta demasiado fiable.

El “trío” de favoritos se completa con Sandra Torres, esposa del expresidente Alvaro Colom, por la Unidad Nacional de la Esperanza. (UNE), partido que se autodefine como socialdemócrata y progresista. El gobierno de Colom terminó mal. Tuvo acusaciones de financiación ilegal, e incluso

de que entre los aportantes figuran personajes vinculados con el narcotráfico. Durante el final de su mandato, en 2011, se produjo el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral al ser baleado por sicarios el vehículo que le conducía al aeropuerto de Guatemala. Al parecer, el objetivo era su representante, el empresario nicaraguense Henry Fariñas, herido pero sobreviviente del atentado. Los autores, habrían sido miembros del cártel de la droga de Alejandro Jiménez que pretendían un “ajuste de cuentas” con Fariñas. La víctima accidental fue el renombrado cantor, poeta y escritor argentino.

Hay más candidatos, pero se presume que estos tres son los únicos que tienen posibilidades de ir a la segunda vuelta el 25 de octubre. Porque no parece que nadie pueda obtener más del 50% de los votos para vencer en la primera.

¿ Quienes pagan “la fiesta” ?

Finalmente, es oportuno rescatar unas frases del informe que publicó el pasado 16 de julio la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo dependiente de las Naciones Unidas y que tuvo hace años como eficiente impulsor al fiscal español Carlos Castresana.

Ese informe detalla “el amplio alcance de la infiltración que el crimen organizado y los distintos grupos de interés han tenido en la política guatemalteca. Los partidos obtienen cerca de la mitad de su financiación mediante la corrupción, incluyendo un 25% que proviene de las élites económicas y empresariales y otro 25% de organizaciones criminales”. (...) Añaden que esta situación es exacerbada “por la débil regulación de la financiación de las campañas, la falta de medios de comunicación independientes y una impunidad casi total en los casos de corrupción política”.

El bloque de intereses comunes que forman las familias de la oligarquía guatemalteca, la veterana incidencia de la embajada norteamericana ,

y los nuevos “actores” -presentes en casi toda América Latina- los grupos del crimen organizado y el narcotráfico, realimentan “el control paralelo” del estado guatemalteco que mantiene al país bloqueado. Guatemala está sometida a esos intereses mezquinos e insaciables de grupos minoritarios.

Dos apuntes para complementar estas afirmaciones: uno de los apoyos internacionales que ha tenido el gobierno del general Pérez Molina, ha sido el Partido Popular español. (Curiosamente tan “PP” como el Partido Patriota del militar depuesto). La ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, esposa del ex presidente Aznar, entregó en febrero del 2015 la “Medalla de Oro de Madrid” al presidente guatemalteco. En la calle, cientos de manifestantes reclamaban por la impunidad y las imputaciones de genocidio que pesan sobre el militar.

El segundo apunte es comentar que la estructura empresarial guatemalteca, prepara para el 8 de octubre un Encuentro Nacional organizado por una entidad llamada “Fundación para el Desarrollo de Guatemala”. Hay dos invitados de honor que disertarán sobre “propuestas que contribuyan a fortalecer las instituciones estatales”: uno de ellos es Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado norteamericano. Mr. Shannon visita frecuentemente Guatemala. La última vez su entrevista con el presidente Pérez Molina coincidió con el día en que su yerno, Gustavo Martínez, fue capturado por tráfico de influencias, ilícito cometido durante su gestión como Secretario General de la Presidencia.

El otro conferenciante sobre “el fortalecimiento de las instituciones estatales” será el ex presidente español José María Aznar (1996-2004). Entre sus antecedentes sobre el tema, el Sr. Aznar tiene el de haber reconocido en abril del 2002 el efímero golpe cívico militar contra el gobierno de Chávez en Venezuela, orquestado por el gobierno norteamericano, y grupos económicos nacionales e internacionales. Su embajador en Caracas, Manuel Viturro junto con el embajador de los EEUU, Charles Schapiro, acudieron juntos a entrevistar al golpista Pedro Carmona, presidente del “gobierno provisional”. Fueron los únicos diplomáticos que visitaron al empresario antes de que el golpe fuera desbaratado y tuviera que huir del país. Pero hay más: en los primeros días de abril, en vísperas del golpe, Pedro Carmona, presidente de la patronal venezolana FEDECAMARAS, viajó a Madrid, donde tuvo reuniones con la Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas, (CEOE).

El general no votará, está preso.

“El pueblo derrotó al general”, pero el largo y duro camino del pueblo guatemalteco hacia su liberación y autodeterminación, sigue obstruido por las mismas barreras internas y externas. Las posibilidades electorales inmediatas son tan inciertas en los cómputos de votos, como previsibles en su inutilidad para producir un cambio real en lo político, económico y social.

“Conocer la verdad es doloroso, pero es una acción altamente liberadora” fue la frase que dejó Monseñor Juan Gerardi, asesinado en abril de 1998, dos días después de haber publicado su informe “Guatemala, Nunca Más”, donde detallaba la gran responsabilidad de las FF.AA. de ese país en el Genocidio.

Hay que seguir

Gane quien gane, el pueblo guatemalteco tendrá que continuar su larga lucha, su trabajo de organización, de acumulación social en las zonas urbanas y en el inmenso, castigado y relegado ámbito indígena y campesino.

Muchas vidas han quedado en ese camino, pero son las que marcan la huella para alcanzar su autonomía. Para ser libres y soberanos, sin oligarquías propias, ni tuteladas extranjeras. Para que la democracia no sea simplemente una palabra bastardeada.

Fuente: Carlos laquinandi Castro. Redacción de SERPAL.

HAITÍ

NEOCOLONIALISMO Y OTRA TRÁGICA FARSA ELECTORAL

Varios observadores de la crisis permanente de Haití ya habían advertido que las elecciones legislativas que tenían que desarrollarse el 9 de agosto de 2015, eran una farsa programada fundamentalmente por los ocupantes del país y el Gobierno haitiano.

En efecto, ellos interpretaban que en un país bajo ocupación directa de la MINUSTAH -Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití- desde junio de 2004, con un gobierno de facto que desde su instalación en mayo de 2011 nunca organizó ninguna elección a pesar de los preceptos de la Constitución y que viola de manera sistemática la Constitución del país, con un vacío parlamentario desde enero de 2015 y el dinero para la organización de las elecciones manejado no por el Consejo Electoral Provisorio sino por el PNUD -Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-, era más que evidente que no se podía hablar de elecciones democráticas. Y mucho menos como un acto de soberanía.

Sin embargo, estos mismos observadores reconocen que las barbaridades perpetradas por bandas de energúmenos durante el desarrollo de esa jornada electoral superaron toda imaginación. Esto queda claro al leer, por ejemplo, el informe elaborado y difundido dos días después por los organismos haitianos de observación de las elecciones. En este informe, entre otras barbaridades, se confirma que hubo: quema de urnas como así también de centros de votación, robo y destrucción de urnas, llenado irregular de urnas, disparos de armas de fuego y pedradas sobre centros de votación, varios muertos, decenas de heridos, etc. Nadie, entonces, con un poco de raciocinio y sensibilidad social puede poner en duda que lo ocurrido no fue una farsa, y trágica. Y, obviamente, cualquier ser humano sensato entiende que dichas barbaridades no pueden ser toleradas como tampoco banalizadas. En este contexto, la exigencia de anulación de las elecciones que surge cada vez de manera más amplia y contundente en todos los 10 departamentos del país resulta, sin duda alguna, lo más sensato para evitar daños irreparables al pueblo haitiano.

Sin embargo, a pesar de todo, los observadores internacionales -tanto los de la UE como así también los enviados por la OEA y la ONU- lo hicieron. Esos fiscales y paladines de la democracia afirmaron: “hubo algunas irregularidades, pero no fueron suficientes para invalidar las elecciones”. Según sus propias palabras: “globalmente las elecciones fueron correctas y Haití ha dado un paso positivo hacia la consolidación de la democracia”. Verdadero escándalo, por donde se lo mire. Y

ellos indignaron aún más al pueblo haitiano cuando enviaron sus “felicitaciones al Gobierno y al Consejo Electoral Provisorio -CEP- por la tarea realizada”.

Pero resulta imprescindible tratar de comprender lo que sucedió y salir un poco del asombro. Por tanto, hace falta recordar algunos datos y hechos muy significativos que ocurrieron en Haití desde la imposición de Martelly como presidente por la comunidad internacional durante el escandaloso proceso electoral de 2010-2011 hasta el domingo 9 de agosto último pasado. Primer dato: el actual presidente del CEP, Pierre Louis Opont, reconoció públicamente unas semanas antes de la catástrofe del domingo pasado que el resultado electoral que tenía el CEP en aquel momento -2010-2011- no fue el que se proclamó. Cabe señalar que Opont ocupaba en aquella oportunidad el puesto de Director General de aquel CEP. También dijo que si no hizo antes esta denuncia era para evitar al país una guerra civil. Otro dato importante que merece ser analizado, son las múltiples maniobras perpetradas sistemáticamente durante los 4 años que lleva Martelly como presidente para no realizar ninguna elección. Lo que condujo al disfuncionamiento del Parlamento haitiano en enero pasado y con Martelly dirigiendo mediante decretos, y, por supuesto, con la bendición de la llamada comunidad internacional.

Por otra parte, ayuda a la comprensión de la realidad al saber, por ejemplo, que varios candidatos aceptados por el CEP para participar de las elecciones son reconocidos públicamente como secuestradores, traficantes de droga, traficantes de armas, asesinos, corruptos, miembros de pandillas armadas, etc.. Fueron denunciados ante el CEP por organismos de defensa de DD.HH. de Haití, tal como la RNDDH -Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos-. Entonces, nadie puede hacerse el sorprendido cuando esos energúmenos actuaron durante la jornada electoral como lo suelen hacer en todos los aspectos de la vida. Sí, devorados por una codicia patológica, esos criminales cometieron toda clase de violación a los DD.HH. para asegurar su “victoria”, la cual jamás podrían lograr respetando las leyes vigentes. Además, mucho antes del domingo pasado se sabía que la participación popular iba a ser tan escasa, que la legitimidad de los elegidos iba a ser cuestionada en todo momento. En este sentido, el Gobierno dirigido por Martelly hizo todo lo posible para asegurar esta baja participación.

En efecto, durante la campaña sus candidatos desataron en distintas oportunidades una violencia criminal donde 5 personas perdieron la vida, más de cien resultaron heridas y hasta le cortaron una oreja a una candidata. El propio Martelly durante una concentración de su partido PHTK en una ciudad próxima a la capital, contestó públicamente con insultos tan fuertes y vulgares -irreproducibles aquí por respeto a la dignidad del lector- a una mujer que le recriminaba la inoperancia de su Gobierno. El machismo acompañado de sexismo expresado por Martelly en esa ocasión provocó el rechazo de la inmensa mayoría, incluidos algunos de sus partidarios. Durante casi toda la noche del sábado 8 de agosto -es decir, el día anterior al de las elecciones- se escuchaban estallidos de armas de todo calibre sobre todo en distintos puntos de la capital donde se concentra la mayor cantidad de los casi 6 millones de votantes. No fue casual, entonces, que el departamento del oeste donde se encuentra Puerto Príncipe, haya sido el lugar donde se registró -según el propio CEP, sólo votó un 10%- el porcentaje más bajo de participación. Cabe recordar también, que el CEP no entregó a tiempo -lo hizo sólo unas horas antes de la apertura de los comicios- a los partidos políticos no oficialistas los famosos mandatos para distribuir a sus respectivos fiscales y así permitir un cierto control más amplio y democrático sobre el desarrollo de las elecciones en los centros de votación -por supuesto los partidos oficialistas sí poseían esos mandatos-. Cuando según el propio Decreto Electoral dichos mandatos tenían que ser entregados a todos 10 días antes. Varios partidos ni siquiera tuvieron esta posibilidad, y Opont para exonerar al CEP de esta gravísima irregularidad, anunció en una conferencia de prensa el domingo a la noche que no hubo suficientes mandatos porque un empleado del CEP había robado unos cuantos. Así, también, se abrió la vía para la falsificación de esos certificados, y surgieron por todos lados falsos observadores. Éstos, en vez de controlar las operaciones electorales, entraban en distintos centros para sufragar en varias oportunidades, y manejaban fuertes sumas de dinero para sobornar y presionar a los votantes para que voten a favor de un candidato u otro. Dinero que sirvió también para sobornar a algunas autoridades de mesa para que no firmaran las boletas donde los oficialistas sospechaban que no eran favorables a ellos.

Pero, a pesar de que todas esas barbaridades fueron denunciadas, fehacientemente documentadas con fotos por testigos presenciales, la comunidad internacional felicitó al Gobierno haitiano, ¡y al CEP! Así, lamentablemente, entiende esa gente cómo hay que construir la democracia en Haití. Así, también, piensan asegurar la reproducción de lo arbitrario y transformarlo en algo natural.

Ahora bien, ante tantas violaciones a las reglas mínimas que tienen que ser respetadas durante cualquier elección en cualquier parte del mundo, queda claro que el pueblo haitiano está sufriendo la consecuencia directa de un plan elaborado conscientemente por la llamada comunidad internacional bajo el control del imperialismo yanqui y los actuales dirigentes de Haití incluido el CEP. En este sentido, lo que ocurrió no fue casual como tampoco una repentina locura de los miembros del Partido Haitiano Tet Kale -PHTK- del presidente de facto Martelly y de sus partidos aliados como Bouclier del ex senador Maxime Roumer, Plataforma Vérité del ex presidente René Préval y la Convención de Unidad Democrática -KID- del actual Primer ministro de facto Evans Paul. Todo responde a un proyecto político donde la soberanía haitiana ha de desaparecer completamente. Es necesario comprender que se trata de la ejecución de una nueva fase de la dominación neocolonial de Haití dirigida fundamentalmente por el imperialismo norteamericano ante la debacle de la MINUSTAH, ahora en plena etapa de retiro gradual.

Pero hay otro tema de esta farsa electoral trágica que merece una reflexión profunda: la enorme abstención reconocida por todos. El propio CEP afirma que hubo una participación del 18% a través de todo el país. Lo que significa que la abstención -según el informe oficial- alcanzó el 82%. Cabe señalar que la mayoría de los observadores rechazan esta cifra del CEP, pues estiman que la participación no superó el 10%. De todos modos, que haya sido el 18% del CEP o el 10% de los observadores, estas elecciones no fueron acompañadas por el pueblo. No se puede, entonces, pasar por alto este dato sin intentar comprenderlo.

A mi entender, esto se debe fundamentalmente a que el discurso político que predominó inmediatamente después de la caída de la dictadura duvalierista en 1986 poniendo como panacea la realización de elecciones, donde las masas compartían la idea que el cambio de su lamentable situación pasaba por su participación masiva en elecciones denominadas democráticas, ya quedó totalmente obsoleto. Y esto no es de ahora, pues salvo las elecciones del 16 de diciembre de 1990, donde por múltiples motivos hubo una participación cercana al 80% y Aristide salió electo presidente, nunca más se registró en Haití una concurrencia a las urnas de manera tan masiva. Por supuesto, lo ocurrido el domingo 9 de agosto pasado marcó un récord de este desinterés generalizado. Lo que, al final, no es sorprendente. Pues el pueblo haitiano se encuentra inmerso en una pobreza extrema y bajo ocupación directa de la ONU, es consciente que el resultado de las elecciones lo define la comunidad internacional -tal como ocurrió sobre todo en las elecciones de 2010-2011- donde efectivamente los ocupantes impusieron a Martelly-, y está también la desilusión provocada a través de tantos años por la mayoría de los dirigentes que el pueblo había elegido al traicionar ellos sus promesas y compromisos electorales. Además, está claro que el sistema en su esencia está constituido para organizar elecciones en nombre del pueblo pero sin la participación del pueblo. Es menester subrayar, también, que en Haití el voto no es obligatorio.

Entonces, el objetivo de las masas para evitar la hecatombe puede resumirse de la siguiente manera: anulación de las elecciones por las buenas o por las malas. Y eso se logrará únicamente con el pueblo en la calle. Hay que paralizar el país hasta obtener la anulación de las elecciones, la disolución del CEP, la renuncia de Martelly, la expulsión de todos los observadores internacionales que avalaron la farsa electoral del 9 de agosto pasado y la formación de un gobierno de transición por las organizaciones populares que luchan en contra de la dominación imperialista y sus vasallos impuestos para "dirigir" el país. Caso contrario, los responsables de la catástrofe del domingo 9 de agosto pasado organizarán del mismo modo las elecciones previstas para el 25 de octubre. En éstas, se realizarán: la segunda vuelta de las legislativas, la elección de las autoridades de las colectividades territoriales y, sobre todo, la primera vuelta para la elección del sucesor de Martelly.

Ciertamente, se trata de un momento crítico donde la lucha de clases entró en su fase de definición. Por tanto, no puede haber titubeo, como tampoco solicitar a este mismo CEP de organizar nuevas elecciones en los lugares donde se registraron las barbaridades señaladas anteriormente. Este último pedido que surgió en varios puntos del país, es un absurdo. Pues es no reconocer la

responsabilidad del CEP y volver a tropezar una vez más con la misma piedra. Sería permitir la transformación de lo ilegítimo en legítimo, y su aceptación social como principio de legitimación de las barbaridades cometidas. Ha llegado el momento de la ruptura con el orden neocolonial para poder construir uno nuevo manejado por los explotados de hoy, sobre todo los que luchan y reivindican el derecho de retomar el camino trazado por los esclavizados cuando acabaron con la esclavitud en 1804.

Fuente: Henry Boisrolin. Rebelión

HONDURAS

CORTE IDH VISITA A LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE TRIUNFO DE LA CRUZ

El pasado 22 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) efectuó una visita in situ a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en el marco del caso que ventila Triunfo de la Cruz versus el Estado de Honduras.

El caso en cuestión es la acumulación de más de treinta denuncias por la usurpación perpetrada por la élite de poder hondureña y la municipalidad de Tela; además de violaciones al Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Previa a la visita a la comunidad Garífuna, el día 21 se efectuó una reunión en la ciudad de Tela, con la participación de la Honorable Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además del alcalde de Tela y algunos de los representantes de supuestas compañías turísticas que han usurpado tierras comunitarias para desarrollar proyectos turísticos.

La reunión fue efectuada en la antigua sede de la Tela Railroad Company, en donde hizo presencia, además, el grupo de trabajadores de la municipalidad de Tela, a los que les cancelaron sus prestaciones con 22 manzanas de tierra pertenecientes a la comunidad de Triunfo, generando un conflicto que ha sido utilizado para fomentar el racismo ya existente en la zona.

El alcalde de Tela, Mario Fuentes, en su intervención durante la reunión fue enfático en indicar que el racismo no existía en Tela, al mismo tiempo que acarrió en masa a los exempleados de la municipalidad de Tela, los que fueron engañados al recibir las 22 manzanas de tierra de Triunfo como pago por sus prestaciones laborales.

La visita a la comunidad de Triunfo incluyó Punta Izopo, lugar donde el fallecido palmero de la muerte, Miguel Facussé, instauró el Parque Nacional Punta Izopo, sin haber efectuado una consulta comunitaria, distorsionando el Derecho a la Consulta, precepto que se ha convertido en un eje fundamental para la sobrevivencia de los pueblos indígenas en el continente, los que venimos siendo afectados por una ofensiva de las empresas extractivas y proyectos megaturísticos.

Las comunidades Garifunas de la Bahía de Tela asistieron a la recepción que se les brindó en Triunfo de la Cruz a los integrantes de la honorable Corte IDH y de la CIDH, los que escucharon con atención a todas las partes involucradas en el intrincado caso, para así emitir en un futuro cercano una sentencia que será paradigmática, ya que recopilará la jurisprudencia emitida por la Corte IDH en relación a los pueblos indígenas.

Entre los reclamos efectuado por la comunidad de Triunfo, es sobre el reconocimiento sobre playas (borde costero) y el territorio marítimo, ya que los títulos emitidos por el estado de Honduras, no reconocen las playas, las que forman parte esencial tanto de la economía Garífuna como de nuestra espiritualidad.

La Corte IDH y la CIDH visitarán además la comunidad de Punta Piedra, la que tiene un caso que espera su sentencia, ante la invasión promovida por un militar hace dos décadas al río Miel, paraje que forma parte del hábitat funcional de esa comunidad.

Cabe señalar que una reunión planificada para efectuarse en el Hotel TELAMAR, previo a la realizada en la Tela Rail Road Company, los Garifunas nos hicimos presentes y fue impedida

nuestra entrada a las instalaciones, y recibimos un trato discriminatorio por parte de los guardias seguridad que nos impidieron verificar la presencia de los miembros de la Corte y la comisión que se encontraban hospedados en ese hotel.

Fuente: Ofraneh en <http://nicaraguamasespanol.blogspot.com.es/>

MÉXICO

GUERRA SUCIA CONTRA LOS PUEBLOS DEL MAÍZ

El 19 de agosto 2015, el juez Francisco Peñaloza Heras, del juzgado décimo segundo de distrito en materia civil, canceló la medida precautoria que desde hace dos años mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico en México en respuesta a una demanda colectiva por los daños que estos granos causan a la biodiversidad y la salud. Sin embargo, la suspensión sigue vigente, ya que su decisión fue inmediatamente apelada por Colectivas AC, representantes legales de la colectividad de 53 ciudadanos y 20 organizaciones que presentaron la demanda en 2013.

La forma en que el juez Peñaloza tomó la decisión, ignorando los argumentos de los demandantes y científicos independientes, pero basándose en los dichos de Monsanto y otras empresas, es otro escalón en la *guerra sucia* contra el maíz campesino y los pueblos del maíz.

En sincronía con su decisión, las transnacionales de transgénicos desataron un aluvión de comentarios a la prensa asegurando que estaba liberada la siembra. Como denunció René Sánchez Galindo, abogado de la colectividad demandante, Monsanto inició una nueva campaña de mentiras, ya que es falso que la siembra de maíz transgénico estuviera liberada.

Las mentiras de la empresa de transgénicos no se limitan sólo a los aspectos legales de la demanda. Dedicar mucho tiempo y recursos a falsear datos para ocultar lo que realmente pasa con los transgénicos en los países donde su siembra es masiva, como Estados Unidos, país sede de Monsanto.

La realidad, basada en estadísticas oficiales de ese país durante casi dos décadas (no en estudios puntuales financiados por las empresas que toman datos parciales) muestra que los transgénicos son más caros que los híbridos que ya existían, que en promedio su rendimiento es menor y que han provocado un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, con efectos devastadores en suelos, agua, y surgimiento de más de 20 supermalezas resistentes al glifosato. La industria afirma que el maíz manipulado con la toxina *Bt* disminuyó el uso de agrotóxicos, pero omite explicar que las plagas se han ido haciendo resistentes al *Bt*, y que luego de una inicial disminución, el uso de agrotóxicos ha ido aumentando cada año. Por ello, las empresas están abandonando la venta de semillas de maíz *Bt*, para vender maíces transgénicos con rasgos apilados, o sea junto a *Bt*, tolerantes a uno o más herbicidas de alta toxicidad, como glifosato, glufosinato, dicamba y hasta 2,4-d, con lo cual el aumento del uso de tóxicos se multiplica vertiginosamente.

Las empresas aseguran también que es posible la coexistencia de maíz transgénico con el maíz campesino. Existen múltiples estudios científicos y estadísticas en muchos países que demuestran lo contrario: donde hay cultivos transgénicos, siempre habrá contaminación, sea por el polen llevado por viento e insectos (a distancias mucho mayores de las previstas por las leyes) o por el trasiego en transportes, almacenamiento, puntos de venta, donde no hay segregación de transgénicos y otras semillas. Muchos estudios en México, incluidos los de la propia Semarnat, muestran cientos de casos de contaminación transgénica de maíces campesinos, aun cuando su siembra es ilegal. Legalizar la siembra aumentaría brutalmente esa contaminación que amenaza directamente la biodiversidad y el patrimonio genético agrícola más importante de México, legado por los millones de campesinos e indígenas que lo crearon y lo siguen manteniendo.

En Estados Unidos la contaminación transgénica es omnipresente. Monsanto hizo de ello un negocio: demanda a las víctimas de contaminación transgénica por uso de sus genes patentados, lo cual le ha redituado cientos de millones de dólares en juicios o acuerdos fuera de juicio. Recientemente Monsanto declaró que no va a demandar a agricultores en México. Sería absurdo creerlo. Por supuesto lo harán, cuando tengan las condiciones para ello. Ya desde 2004, Monsanto

publicaba en periódicos de Chiapas avisos que advertían que el que usara ilegalmente sus genes patentados en importación, siembra, guarda, comercialización o exportación podría sufrir cárcel y multas mayores. Además instigaban a que si usted conoce alguna situación irregular, se contactara con Monsanto para evitar ser acusado de cómplice. Si no siguió adelante fue porque no tenía el marco legal para ello, tema que ahora presionan por corregir.

Las transnacionales mienten cuando afirman que los transgénicos son inocuos a la salud. De partida, los cultivos transgénicos tienen un nivel hasta 200 veces más alto de residuos de glifosato, herbicida que la OMS declaró cancerígeno en marzo 2015. Y casi cada mes se publican nuevos artículos con evidencia de daños de los transgénicos a la salud o al medioambiente.

Por ejemplo, el 14 de julio de 2015, la revista científica arbitrada *Agricultural Sciences* publicó una investigación del doctor Shiva Ayyadurai, que muestra que la soya transgénica acumula formaldehído, sustancia cancerígena, junto a una disminución drástica de glutatión, antioxidante esencial para la desintoxicación celular. El estudio analizó 6 mil 497 experimentos de 184 instituciones científicas en 23 países. El estudio pone de manifiesto la invalidez del principio de equivalencia sustancial que se aplica para evaluar transgénicos, alegando falsamente que son equivalentes a los convencionales. Existe gran desconocimiento de cómo la transgenia afecta la biología del maíz y qué impacto tiene en la biodiversidad y en la salud de la población de México, donde el maíz se consume más que en ningún otro país.

La guerra recrudescer, pero también crecen las muchas resistencias, como la moratoria popular de no permitir transgénicos en nuestros campos y mesas, y eso, no va a terminar.

Fuente: Silvia Ribeiro en <http://www.jornada.unam.mx/>

NICARAGUA

PRIMER LOGRO DE “GUARDIANES DE YAOSKA” CONTRA LA MINERÍA EN RANCHO GRANDE

El Tribunal de Apelaciones de Matagalpa dio paso al Recurso de Amparo interpuesto el pasado 28 de Enero por el Movimiento Guardianes de Yaoska en contra de la explotación minera en su territorio, en el que están implicados los funcionarios del Ministro de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), la Policía Nacional y la Empresa Minera B2Gold.

En aras de que Rancho Grande sea liberado del peligro de la explotación minera, la población de ese municipio con el apoyo técnico y legal de Centro Humboldt, ADDAC, ADIC, Movimiento Comunal Nicaragüense y la Diócesis de Matagalpa han venido luchando por distintas vías, pero esta vez la lucha se da a través de la vía judicial; con el acompañamiento de Tania Sosa, Oficial de incidencia en Industrias de Centro Humboldt.

Carlos Siles, Presidente del Movimiento Guardianes de Yaoska se presentó hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, para introducir un recurso de amparo en la sala de lo constitucional de ese poder del Estado y evitar que una empresa de capital extranjero comience un proceso de explotación minera en dicho municipio.

Según Siles “más del 90% de la población rechaza este proyecto minero, puesto que el municipio ha subsistido durante muchos años de la producción y económicamente ha crecido gracias a la ganadería y agricultura, y los proyectos mineros harán que el municipio retroceda ya que habrá un deterioro de los suelos, los recursos hídricos y eso afectará la producción.”

Con una población estimada de 49,730 habitantes, 90% de la cual se ubica en zonas rurales (INIDES, 2005), el municipio de Rancho Grande siempre ha subsistido económica y socialmente de la producción y comercialización agropecuaria, principalmente de café y cacao, granos básicos, hortalizas, entre otros.

El río principal que sustenta las formas de vida del municipio de Rancho Grande desde sus altas montañas hasta sus valles, es el río Yaoska, nombre por el cual se hicieron llamar "Los guardianes de Yaoska".

El 23 de noviembre de 2010, el Concejo Municipal de Rancho Grande emitió opinión desfavorable y rechazó la solicitud de la concesión de exploración para la empresa Coexsa (Sociedad Exploradora Corazón), sobre un lote de cuatro mil 711 hectáreas ubicadas en la parte alta del Río Babaska, Río Manceras, Río El Chancho y Río Yaoska.

Otra resolución idéntica fue emitida el 11 de julio de 2012 contra la empresa Glencairn S.A. sobre el lote de cuarenta y ocho mil 604 hectáreas en los sectores de Río Bijao, Kiwaska, El Tuma, Bilampí, Caño Negro y los afluentes de los Ríos Yaoska y El Tuma.

A partir del 2010, la empresa B2GOLD, ha tomado mayor fuerza en su campaña social para convencer a las autoridades locales y a la población, de aprobar y avalar el Proyecto de explotación a cielo abierto en el Cerro conocido como "El Pavón" en la comunidad de Yaoska arriba.

Es necesario recalcar que por parte de la empresa B2Goldt se desconocen por completo los estudios técnicos, ambientales, económicos y sociales de este proyecto de explotación, puesto que hasta la fecha, nunca ha sido consultado públicamente, ni presentado a ningún sector de la población de Rancho Grande.

Centro Humboldt y las organizaciones involucradas en esta lucha celebramos que le hayan dado Trámite al Recurso de Amparo que interpusimos, y esperamos que las autoridades actúen en razón y evalúen objetivamente el caso. Éste es sobre todas las cosas un logro alcanzado por las y los habitantes del municipio de Rancho Grande que quieren a toda costa evitar que el medio en el que viven se deteriore por la autorización de concesiones imprudentes.

Nuestra organización no está en contra del progreso económico y social de los Municipios, por el contrario, promueve acciones conjuntas con los principales actores locales para mejorar la organización, capacidades y la producción que en definitiva contribuyen al desarrollo sostenible de sus comunidades. Pero también damos respaldo a aquellos que luchan por la protección de sus recursos naturales.

Fuente: <http://www.humboldt.org.ni/node/>

PANAMÁ

¡CUIDADO CON LA DESCENTRALIZACIÓN!

"No todo lo que brilla es oro", decía mi abuela, la cual no tenía ningún título académico, pero sí la sabiduría que da la vida. Frase que, traducida al lenguaje de las mentes planas, significa: no te dejes engañar, que no todo lo que parece bueno, lo es.

A veces, para distinguir la verdad de la mentira se requiere observar el contexto, el marco en que están dadas las cosas, de lo contrario nos quedamos con la apariencia, sin captar la esencia del fenómeno. Y la apariencia lo es todo en política capitalista.

Entre la bruma de las apariencias, hoy, el gobierno oligárquico de Juan C. Varela quiere ofrecernos su propuesta de "descentralización" administrativa. En principio, todo parece bien: el régimen presidencialista panameño renuncia a parte de sus "competencias" y su "presupuesto" para cederlos a los municipios, los que supuestamente son la "entidad fundamental" del régimen político "democrático", para que allí se trasladen "decisiones de la Administración Pública a la ciudadanía". Suena bonito.

Si uno se atiene al mero texto de la ley, en este caso Ley 37 de 29/6/2009, como con todas las leyes, no entiende nada, como suele pasarle a quienes tienen desviaciones juricistas. Pues el texto de la ley es la apariencia, el oropel que se le vende a la ciudadanía. Para entender el verdadero "espíritu de la ley", como gustan decir los abogados, hay que poner le cuidado al contexto social, económico y político en que se emiten las leyes.

El marco político y la doctrina económica en la que ha sido parida esta ley es: el neoliberalismo, dictado desde organismos como el Banco Mundial al que obedecen todos los gobiernos empresariales panameños. En ese sentido, los actos de descentralización de los gobiernos, no son para ampliar la democracia y poner en manos del pueblo las decisiones de la administración pública.

Lo cual sería contradictorio con la nueva ola de criminalización de la protesta social dictada por el ministro de Seguridad Pública, con el aval del presidente Varela. Descentralizar y democratizar de verdad riñe con lo que hace el gobierno con los Ngäbes-Buglés que protestan contra Barro Blanco, a los que no escucha y quiere imponer la hidroeléctrica de todos modos. La verdadera descentralización contradice la actitud de las instituciones gubernamentales contra las comunidades que exigen reparación de escuelas, agua potable y transporte público.

¿Cómo un gobierno que reprime, desoye al pueblo y no atiende las demandas sociales va a ejecutar una política de descentralización que ponga en manos de las comunidades las decisiones? Hay una contradicción evidente. La respuesta es simple, la descentralización que se ejecuta bajo el neoliberalismo no busca más democracia, sino transferir las CARGAS FISCALES, aligerando las responsabilidades del estado y poniéndolas sobre la ciudadanía a través de los municipios, que a su vez están dirigidos por políticos antidemocráticos y corruptos que representan al gobierno y no al pueblo.

¿Usted se ha preguntado por qué proliferan las bodegas, bares y cantinas en municipios populares, como San Miguelito? Aparte del objetivo de embrutecer al pueblo, porque son la única fuente de financiamiento de los municipios y dinero fresco en manos de los alcaldes. Ahora, Varela anuncia que reactivará la Ley 37 (congelada desde 2009) con modificaciones, entre otras que se desconocen, con la entrega a los municipios de manejo del IMPUESTO DE INMUEBLE!

No hace falta nacer con las neuronas de Einstein para predecir que pronto sobrevendrán multitud de conflictos entre alcaldes que quieren más plata para cualquier proyecto y la gente que ya no le alcanza para vivir y se verán sometidos a aumentos arbitrarios del impuesto de inmueble. En algunos lugares, ejecutarán lo que empezó Martinelli, reavalúos del valor catastral de las casas de acuerdo al valor comercial (capitalista) sin considerar los ingresos de la gente.

Pero que aumenten los impuestos de inmueble no es el único peligro. Quienes tienen que estar alerta son los educadores y personal de salud, pues si se transfieren a los municipios la administración financiera de las escuelas y centros de salud, como se ha dicho, el peligro es que en los municipios de gente pobre, las escuelas que ya están deterioradas se terminarán de caer. Los gremios docentes y médicos deben estudiar esto que ya se ejecutó en países como Perú, en la década de los 80, con resultados desastrosos.

La descentralización de "competencias" del gobierno nacional lo que busca es transferir gran parte del gasto social, para que los responsables sean políticos de poca monta que dirigen los municipios, y los ciudadanos estemos fragmentados por localidades en nuestras demandas. De esa manera, pretenden que haya más plata en manos del gobierno central para obras faraónicas (donde lucran los empresarios amigos) y el pago del enorme endeudamiento estatal por las obras construidas empezando por la ampliación del canal y sus sobre costos.

Detrás de la descentralización opera la misma lógica del sistema integrado de salud que se pretende ejecutar paralelamente, al unir los hospitales y centros de salud del MINSA con la Caja de Seguro Social, para que los aportes de los asegurados carguen con los dos sistemas. Si no fuera ese el objetivo: ¿Por qué el gobierno no pone el capital para el fondo de salud y de jubilaciones de la CSS, prometido desde 2005? En fin, que tengamos cuidado con las cuentas de vidrio, que brillan pero no valen nada.

Fuente: Olmedo Beluche en <http://www.alainet.org/es/>

PUERTO RICO

LA ISLA DEL (DES)ENCANTO

Quienes visitan Puerto Rico comprenden por qué la llaman la isla del encanto. Lo palpan en el aire, en la luz, en el paisaje y también en la gente que la habita. Algo muy diferente provoca la dramática situación que vive su pueblo. Porque los puertorriqueños nunca han sido dueños de ese entorno maravilloso ni tampoco de su destino, amarrados bajo el dominio colonial, primero de España y durante los últimos 117 años de Estados Unidos.

Washington trató de engañar al mundo disfrazando la colonia con el embeleco de un imaginario Estado libre asociado (ELA), que promovía como una vitrina del Caribe de las bienandanzas que la tutela nortea ofrecía generosamente. La experiencia para los boricuas fue bien diferente. Sus consecuencias sociales, políticas y económicas han encontrado siempre la resistencia popular, muchas veces desconocida fuera de la isla.

Tras recorrer un largo camino el tema llega hoy a una coyuntura definitiva. El ELA fue rechazado por la mayoría absoluta del pueblo puertorriqueño en el plebiscito efectuado allí en noviembre de 2012, que las autoridades estadounidenses ignoran hasta ahora.

En los últimos años la situación se ha complicado, hasta el extremo de que el país no puede pagar sus deudas, la economía continúa decreciendo y urge encontrar una salida a la grave crisis financiera. La asamblea legislativa local aprobó una ley enfocada a buscar una solución, olvidando que ni ella ni ninguna otra institución del ELA posee capacidad soberana.

Quienes verdaderamente mandan allá se lo recordaron. El 6 de julio de 2015 la Corte Federal de Apelaciones del primer circuito, ubicada en Boston, Massachusetts, que es la máxima instancia judicial para Puerto Rico, determinó la inconstitucionalidad de esa ley y la anuló subrayando, argumento irrefutable, que es el Congreso federal estadounidense el que tiene plenas facultades sobre ese país y no la asamblea insular.

Hay que agradecer a los jueces del mentado tribunal haber puesto el dedo en la llaga aunque, en rigor, repitieron lo que ya se sabía y lo han sufrido los boricuas por más de un siglo. Sólo que el recordatorio no llega en un momento cualquiera.

El estatus colonial fue rechazado categóricamente por la población y ahora se comprueba igualmente que el modelo económico ha fracasado, ya no es viable y quienes lo administran no tienen capacidad legal para enfrentar el desastre. La quiebra de su economía es consecuencia directa del sometimiento a Estados Unidos y cualquier medida, en las condiciones actuales, estaría exclusivamente en manos del gobierno federal.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se refirió el 15 de julio a los problemas que afectan a Puerto Rico y de los que el gobierno federal evade su responsabilidad y se abstiene de tomar decisión. "Su falta de acción en cuanto a las herramientas que nos prohíbe tener y nos niegan, como es la quiebra, lo demuestran... son una serie de instancias en las que Estados Unidos continuamente nos ha faltado el respeto como nación."

Esa actitud, junto con la negativa de excarcelar a Óscar López Rivera, hace afirmar a Carmen Yulín que el estatus de Puerto Rico es insostenible y el país tiene que decir basta ya.

Por mucho tiempo la propaganda estadounidense se empeñó en presentar a Puerto Rico como un modelo para el resto de América Latina, con su economía supuestamente floreciente en un país libre, feliz y pacífico.

Ocultaba el verdadero rostro del ELA: la destrucción de la economía autóctona, el dominio absoluto de las corporaciones yanquis, el desempleo generalizado, la emigración masiva, el grave deterioro del medio ambiente y la persecución al movimiento patriótico, víctima del acoso y el espionaje del FBI y de otras incontables acciones hostiles, incluyendo asesinatos que han conmovido al país pero siguen totalmente impunes.

Hace ya más de 10 años que ese modelo entró en la crisis que ahora alcanza titulares en la gran prensa. Desde entonces, la economía se estanca o retrocede. Luego de saquear sus recursos, no

pocos inversionistas se han retirado de la isla; el déficit fiscal no dejó de crecer, y más de la mitad de la población se ha visto forzada a emigrar: quedan en la isla unos 3.7 millones y su diáspora en Estados Unidos se acerca ya a 5 millones, según el censo oficial más reciente.

El pueblo, por su parte, ha librado una lucha admirable. Cuando por todas partes avanzaba la ola neoliberal, en Puerto Rico las masas trabajadoras impedían la privatización de servicios públicos esenciales. Lograron con su lucha sacar al ejército invasor de Vieques y de otras bases militares; fueron sus estudiantes los primeros que *tomaron* las universidades y las calles exigiendo que la educación no fuera presa del lucro; soportando la represión que nunca ha cesado y enfrentando al imperio más poderoso, dieron su voto, en noviembre de 2012, rechazando de modo aplastante al régimen colonial.

Ahora, mientras los políticos discuten y los grandes emporios mediáticos descubren que Puerto Rico existe, decenas de miles de boricuas más se van, escapan del falaz *encanto*. No van hacia el paraíso. Los esperan, como siempre, la pobreza y la miseria, pero también la discriminación, el odio racial y el desprecio en los arrabales de New York y Chicago, en las granjas de Florida y en otras partes. Su partida es la prueba irrefutable: la *vitrina* se cae en pedazos

Fuente: Ricardo Alarcón de Quesada. La Jornada

VENEZUELA

VENEZUELA EL VERDADERO PROBLEMA

Los economistas neoliberales, tras haber caído con sus recetas en el mayor desprestigio por todo el planeta, están a punto de tomarse su revancha con Venezuela y catalogan a la crisis de desabastecimiento como el fracaso del modelo chavista. No puede discutirse que la crisis existe; pero en cuanto a las causas, ni todo es tan simple como lo explica el gobierno al denunciar un golpe de mercado, ni como lo explica la oposición, que todo lo reduce al control de precios y sistema cambiario.

Los saqueos a supermercados nos retrotraen a la Argentina y los días previos a la caída de De La Rúa. En julio, en Barrancas del Orinoco, estado de Monagas, medio millar de personas asaltaron un local de la cadena estatal PDVAL y robó sus productos. Dos días después, una multitud saqueó los depósitos de un supermercado en San Félix y la Guardia Nacional se vio obligada a copar las calles para recuperarlas de las hordas enardecidas. Apareció entonces lo que Maduro tantas veces anunció que buscaba la oposición: el primer muerto. Aparte de locales, los camiones transportadores de mercaderías también son atracados. El gobierno importa productos por toneladas, pero si a lo que es saqueado se suma lo que se llevan los contrabandistas y acaparadores, todos los esfuerzos terminan siendo insuficientes. En 2014 fueron incautadas más de 28.000 toneladas de alimentos que estaban destinados al contrabando.

Venezuela se encamina trágicamente a un agotamiento de sus inventarios de productos, a la vez que sus reservas internacionales van en picada. La derecha internacional aconseja liberar los precios; pero eso dispararía la inflación y los más débiles sucumbirían. Una luz roja titila sobre los depósitos de arroz, maíz y trigo. Para colmo, aun cuando el gobierno logra exitosos convenios para conseguir granos en el exterior, los proveedores no pueden dar una respuesta tan rápida como se necesita, ya que los embarques, descarga y distribución a todo el país toman su tiempo y lo que se embarca no es suficiente. Esto sucede porque el problema es estructural y no circunstancial.

Paradójicamente, un país pequeño como Uruguay se ha transformado en un formidable salvavidas para la gran potencia petrolera del continente, tras canjearse 300 millones de dólares que Uruguay adeudaba a PDVSA por 235.000 toneladas de alimentos. De todas maneras, aunque es un alivio transitorio, esto está a años luz de solucionar la crisis. La oposición espera a que terminen de agotarse los inventarios para darle un certificado de defunción al modelo chavista. Con la crisis resulta más fácil conseguir adeptos para las guarimbas o para marchar en las “manifestaciones pacíficas” convocadas para tumbar al gobierno, tan pacíficas que las molotov, piedras y armas de fuego abundan tanto como las pancartas.

En pleno caos, las hienas tienen su fiesta. El gobierno acusa y encarcela a los acaparadores; pero cada vez son más los que lucran con la desgracia de sus compatriotas. La empresa distribuidora Herrera C.A. tenía acaparadas mil toneladas de alimentos en el estado de Zulia, por lo que fue intervenida temporalmente. En el oeste de Caracas, el gobierno nacional decretó la ocupación de los galpones de varias empresas de La Yaguara. Una de las factorías ocupadas es Cargill, la cual distribuye el 70 % de los alimentos que produce a las redes estatales Mercal y Pdval. Siete mil panaderías han sido perjudicadas por la escasez. Falta harina de trigo, azúcar, aceite... falta todo. Faltan pañales desechables y también jabón para lavar los reutilizables. Falta champú, pasta dental y desodorante, lo que en un país que se desgarró cuando su candidata a Miss Mundo pierde, es una tragedia insoportable. Falta todo, menos medida, colaboración, solidaridad, honradez y responsabilidad. Eso nos lleva a hablar de las causas no tan visibles de esta crisis.

El gobierno fija precios guiado por una política humanitaria; pero los comerciantes aprovechan la desesperación de los consumidores y los multiplican. Muchos prefieren pagar un producto a 100 veces su valor regulado que hacer filas de tres horas en las cadenas estatales o arriesgarse a no conseguirlos.

Polar, la mayor productora de cerveza, cerró dos de sus seis plantas por falta de materia prima. Es que para adquirir la cebada, que viene del exterior, Polar necesita que el gobierno le libere dólares, esos mismos que escasean para adquirir otros productos de alta necesidad. El problema no es que a la gente le falte cerveza, el problema es que miles de personas queden sin trabajo. El gobierno acaba de pagar una suma importante a los proveedores internacionales, con lo que se espera que la producción, tanto de Polar como de Cervecería Regional, retome la normalidad a mediados de agosto; pero aún queda una deuda de 217 millones de dólares.

Desde fines de 2012, el gobierno comenzó a retacear la oferta de dólares, lo cual ha venido complicando la importación de alimentos y medicinas, entre otros productos. Es obvio que la caída estrepitosa de los precios del petróleo golpeó a Venezuela en el hígado, ya que aquel representa el 96 % de los ingresos por concepto de exportaciones. De aquí surge la primera causa del caos: Venezuela ha sido siempre un país monoprodutor que importa la inmensa mayoría de las cosas que consume. Chávez, dos años antes de su muerte, intentó revertir la dependencia petrolera e impulsó varios proyectos de industrialización; pero esto es algo que tendría que haberse iniciado muchas décadas antes para que hoy se sintieran los beneficios. Uruguay, sin quererlo, vuelve a beneficiarse con las crisis ajenas, pudiendo llegar a venderle ganado gordo en pie, nacido y criado en este país, y casi todo lo que produce.

Otro elemento que empeora la situación es la sobredemanda, ya que la gente quiere comprar no solo lo que necesita, sino para formar una reserva. A modo de ejemplo, el país consume mensualmente 125 millones de rollos de papel higiénico; pero debido a una sobredemanda de 40 millones, el gobierno ha decidido importar 50 millones más para llevar tranquilidad a la población. Si no se entiende este concepto, estaremos simplificando en extremo la situación. Es lo mismo que ocurre con las corridas bancarias. Basta un rumor para que se propague la histeria y se retiren los depósitos abruptamente poniendo en problemas a bancos que en realidad estaban saneados.

No son pocas las cosas que avivan el fuego. La pasión con que los venezolanos tratan todos los temas no puede ignorarse. No pidamos moderación en sus discursos ni a los gobernantes ni a la oposición; y quien no entienda esto no entenderá nada porque no conoce Venezuela. La cancha está marcada hace tiempo entre los que convocan a derrocar al gobierno de cualquier manera y los que dicen "no pasarán". Esto es la lucha de clases en su máximo nivel. La derecha oligárquica quiere retomar las riendas del poder para volver al sometimiento de la mayoría y ensaya nuevas fórmulas para lograrlo, mientras que el gobierno tiene la difícil tarea de intentar ser socialista en un mundo capitalista que no tolera insubordinaciones.

A esto se suman dos males endémicos e históricos: la corrupción y la delincuencia. Por si fuera poco, Venezuela es el refugio de millones de colombianos que huyen de las motosierras de los paramilitares uribistas, pero también es un campo de acción para que estos desarrollen sus crímenes, importando la industria del secuestro, con lo que no quiero decir que el sicariato y el secuestro sean una industria exclusivamente importada.

Pruebas del golpe de mercado

Veamos ahora el aspecto más retorcido de esta trama. Por períodos suelen desaparecer de los anaqueles productos como la leche; pero hay queso, chicha (elaborada con crema de leche) y yogurt. Falta el champú, pero no falta el baño de crema, las sales para bañeras o los champúes más caros. Falta papel higiénico, pero no faltan servilletas ni toallas de papel. No hay azúcar, pero hay postres, tortas y miles de cosas que la requieren en su producción. No hay acetona, pero sí hay esmalte de uñas. No hay máquinas de afeitar, pero sí hay crema de afeitar. En pocas palabras, no se encuentra el producto original, pero sí sus derivados. Esta es la pata de la sota.

Debido a que los comerciantes establecían el precio de un producto hasta en un 200 % por encima de su valor real, en 2013 el gobierno estableció el control de precios sobre algunos productos básicos de la canasta familiar. Esto provocó la aparición de nuevos productos que buscaban sortear la regulación. Por ejemplo, falta arroz, pero hay arroz saborizado, el cual sale caro pero está fuera de la regulación. Los precios de los productos derivados no están controlados por el gobierno, por lo que para los comerciantes es más rentable vender los derivados o sustitutos haciendo desaparecer los productos base. La harina de maíz está regulada a 12 Bs. el kilo; pero escasea. La harina enriquecida con arroz y avena sí está disponible, pero vale 40 Bs., y como la necesidad tiene cara de hereje, los consumidores llevan lo que hay. Los empresarios privados, a diferencia del gobierno, no tienen interés en vender los productos más accesibles, sino los más caros y lucrativos.

La guerra que vive Venezuela es contra la codicia de los grupos de siempre, los mismos que en 2002 derrocaron a Chávez e impusieron al presidente de FEDECÁMARAS en su lugar, los mismos que controlan al 70 % de los empresarios privados, los mismos que cuando tenían el poder mantenían en la miseria al 80 % de la población. Sin embargo, el chavismo no está exento de culpa. La lucha contra la corrupción y la delincuencia han sido insuficientes y las advertencias de Chávez sobre la necesidad de diversificar la economía, tanto en el sector público como privado, no fueron debidamente atendidas. “No siempre vamos a tener petróleo”, avisaba.

De esa falta de diversificación también es responsable el sector privado que ahora protesta y se queja pero jamás hizo nada al respecto. El sector privado, que se congrega en torno a FEDECÁMARAS y CONSECOMERCIO, siempre fue enemigo de la política solidaria del chavismo y ha hecho lo posible por demolerlo. Tras el fracaso del complot con el paro petrolero e innumerables intentos de magnicidio, esta vez parece que encontraron la receta perfecta para tumbar al gobierno; porque cuando los ciudadanos van al mercado y no encuentran lo que buscan no se enardecen contra FEDECÁMARAS o CONSECOMERCIO, sino que van a golpear las puertas del Palacio de Miraflores. Estando yo en Venezuela, un individuo fue detenido en la playa cuando levantaba su lanzamisil contra un avión en el que viajaba Chávez. Intentos como ese son innumerables; pero ahora, las sabias palabras de Bill Clinton se convierten en verdad rebelada: “Es la Economía, estúpido”.

Los golpistas han refinado sus métodos. La gente pierde la lealtad al gobierno cuando no tiene el estómago y los bolsillos llenos. Antes de derrocar a Salvador Allende, los centros financieros internacionales le cerraron el grifo crediticio. También eran comunes las colas para obtener productos. La oposición venezolana, derrotada una vez más en las elecciones de 2013 busca ganar en los anaqueles lo que perdió en las urnas. Funciona. Muchos chavistas están desertando.

¿Y qué pasa con los dólares? El economista español Alfredo Serrano denuncia algo tremendo con las divisas que el gobierno vende al sector privado para importar mercaderías: Dejan una parte afuera, otra para el mercado ilegal y otra parte para comprar mercancía, pero menos de la que debían haber comprado”.

Los venezolanos soportaron estoicamente el paro petrolero gracias al inigualable liderazgo de Hugo Chávez, que supo desnudar el complot ante la opinión pública; pero ahora la situación es más dura y él no está. El mayor problema de Venezuela no es que falten dólares, café, azúcar, granos o medicinas. El problema es que falta Chávez.

Enrique Ortega Salinas. Rebelión